
	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

ALERTA TEMPRANA N° 022-2022


Fecha: 29 de agosto de 2022

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Rural			
		Corregimiento	Veredas	Consejo Comunitario	Resguardo Indígena
Nariño	Ipiales	Cofanía Jardines de Sucumbios	Alto del Amarradero, Argentina, Brisas del Gavilán, Brisas del Rumiyaco, El Empalme, Fronteras del Amarradero, Jardines de Sucumbios, La Playa, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Ranchería, San José de los Pinos y Santa Lucía	Consejos Comunitarios: Liberación y Futuro, Nuevo Renacer Nueva Esperanza	Resguardo Indígena Santa Rosa Sucumbios Resguardo Indígena Pastos de Rumiyaco, Resguardo Indígena Ishu Del Pueblo Awá, Resguardo Indígena Nasa Uh Resguardo Indígena Ukumari Kankhe Del Pueblo Cofán
Putumayo	Orito				Cabildo Indígena Alto Temblon Cabildo Indígena Playa Rica Cabildo Indígena Alnamawami Cabildo Indígena Yarymo Pilt Kwazi Cabildo Indígena Awá Sevilla Cabildo Indígena Pibi Pai Cabildo Indígena Valle Hermoso Cabildo Indígena Awá Blanca Piedra Verde Cabildo Indígena Mainkin Su Resguardo Indígena Los Guadales Cabildo Indígena Damajawa Cabildo Indígena El Chanul Cabildo Indígena La Turbia

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

					Resguardo Indígena El Espingo Resguardo Indígena Selva Verde Resguardo Indígena Caicedonia Resguardo Indígena Cañaveral Miraflores Resguardo Indígena Bellavista Resguardo Indígena Aguablanca Resguardo Indígena Inkál Watsal Resguardo Indígena Inkawá Cabildo Indígena Kuisminda Cabildo Indígena Awá In Marein Cabildo Indígena Sindawa Alto Tesalia
	San Miguel				Resguardo Indígena Irak Cristalina li Cabildo Indígena Monterey Cabildo Indígena La Raya Cabildo Indígena Awá Wan Makna La Dorada
	Valle del Guamuez				Cabildo Indígena Awá Tatchan Cabildo Indígena Awá Im Cabildo Indígena Alto Convoy
	Puerto Caicedo				Resguardo Indígena San Andrés - Villa Unión - Las Vegas Resguardo Indígena Damasco Vides Cabildo Indígena Awá Campo Bello Cabildo Indígena Brisas Del Palay
	Puerto Asís				Cabildo Indígena La Cabaña Cabildo Indígena Awá Villa Del Sol Cabildo Indígena La Planada

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

ALCANCE Y NATURALEZA DE LA ALERTA TEMPRANA

De conformidad con el monitoreo y análisis que realiza la Defensoría del Pueblo a los factores de amenaza y vulnerabilidad que pueden suponer infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y afectaciones los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan el Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos de Ipiales (Nariño) y territorios colectivos Awá en dicho Corregimiento, en Piamonte (Cauca), en Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón (Putumayo), esta institución se permite emitir la presente Alerta Temprana. Lo anterior, en el marco de las funciones que le han sido atribuidas a la Defensoría del Pueblo mediante la Ley 24 de 1992 y el Decreto 025 de 2014, así como lo dispuesto el punto 3.4.9 del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante ‘Acuerdo Final’) y sus disposiciones reglamentarias: el Decreto Ley 895 de 2017 y el Decreto 2124 de 2017.

Este documento realiza una labor de advertencia sobre los elementos que conforman el actual escenario de riesgo en las zonas señaladas, con el fin de promover la adopción de medidas de prevención, protección y atención por parte de las autoridades competentes.


Cabe anotar que la presente Alerta tiene una **naturaleza humanitaria y cuenta con una perspectiva de derechos¹ y de seguridad humana²**. Por tanto, tiene como propósito promover la adopción de medidas de prevención, atención y protección por parte de las autoridades competentes, de cara a cada uno de los factores constitutivos del riesgo, y a partir de la obligación que les asiste de emprender acciones de reacción rápida a los riesgos y amenazas que a continuación se describen. Como bien lo expone el artículo 6° del Decreto 2124 de 2017, se busca así “(...) contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección”. Por consiguiente, **la presente Alerta NO es un documento de seguridad o de inteligencia**, acciones que corresponden solo a la labor que desempeña el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.

Antes bien, se propende por impulsar medidas de prevención asociadas a la garantía de la “**seguridad humana**” y de derechos. Como bien ha referido el Secretario General de la Asamblea General de las Naciones Unidas “(...) ningún país puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos (DD.HH). Esa relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso”³. Por tanto, “(...) ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad (...). Para hacer frente a las amenazas a la seguridad también se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales sólidos que

¹ Según el numeral 2° del artículo 3 del Decreto 2124 de 2017, la perspectiva de derechos “Se basa en el respeto y la garantía de los derechos contenidos en las normas nacionales e instrumentos internacionales, relacionados con los derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal; libertades civiles y políticas; e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.”

² Ello se deriva del enfoque plasmado explícitamente en el Acuerdo Final.

³ Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

juntos disminuyan las probabilidades de conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo y promuevan las libertades humanas para todos”⁴.

Así, la posibilidad de ocurrencia (riesgo) de violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad y al DIH se analizará a partir de la valoración de los factores y variables que impactan severamente el escenario de riesgo.

a. El **contexto territorial del conflicto**, mediante el cual se valorará la relevancia que tienen los territorios focalizados para los intereses de diversos actores armados ilegales.

b. El **contexto de amenaza**: Por amenaza o fenómeno amenazante, la Defensoría del Pueblo entenderá todo *“factor, situación acción o persona que expone a un individuo o un grupo (...) ante un potencial peligro de vulneración de sus derechos, que puede estar originado por grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados, asociados a factores económicos, políticos o sociales”*⁵.

c. **Vulnerabilidades**: Por vulnerabilidades se entienden aquellos *“factores y características de una persona, grupo humano, comunidad o territorio que aumenta la susceptibilidad de sufrir daño a partir de la ocurrencia de un fenómeno desestabilizador”*⁶.

d. **Capacidades o factores de protección sociales e institucionales**: Al hablar de capacidad, por su parte, se hace referencia a la *“disponibilidad de recursos, habilidades, aptitudes, conocimientos y otros factores protectores institucionales y sociales con los que las autoridades, las personas, organizaciones y comunidades; cuentan para promover los derechos, garantizar el goce efectivo de los mismos, prevenir y protegerse de la violencia, (...), atender a las víctimas (...), movilizar y fortalecer las redes de apoyo social”*⁷.

De lo anterior se tiene que, en el marco de lo referido en la presente Alerta Temprana, el riesgo de vulneraciones a los derechos de la población étnica no se explicará únicamente por el accionar de los grupos armados ilegales. Dicha probabilidad de violaciones y/o infracciones al DIH se exagera y posibilita en contextos territoriales como el que se presenta a continuación, con marcada ausencia o presencia diferenciada del Estado, particularmente de su oferta social/civil orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, y donde los mecanismos de afrontamiento, autoprotección y resistencia social se han visto profundamente socavados y requieren ser fortalecidos.


Por consiguiente, al final de la presente, se formularán diversas **recomendaciones**. En ejercicio de las facultades del Defensor del Pueblo de *“hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los*

⁴ Ibidem.

⁵ Defensoría del Pueblo, *Indicadores para el monitoreo, advertencia y prevención del reclutamiento y utilización Niños, Niñas y Adolescentes*, Bogotá, 2015, p. 11.

⁶ Ibidem. p. 12.

⁷ Ibidem.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

*Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio*⁸, todo lo anterior se realizará con el fin de impulsar la acción preventiva y protectora del Estado a la cual se aludió previamente, con enfoque de derechos y de seguridad humana. Cabe anotar que dichas recomendaciones son pautas orientadoras del accionar estatal, sin perjuicio de los deberes constitucionales y legales que les asisten a las entidades compelidas en materia de respeto y garantía de los derechos humanos (DD.HH).

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO

Indígenas ☒ Afrocolombianos ☒ Otra población civil ☐

Cantidad aproximada

Corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos: 2.703 habitantes
Pueblo Awá: 7.672 personas.

Grupos sociales vulnerables

Población indígena y afrocolombiana; mujeres; niños, niñas y adolescentes.

Condición social y/o actividad


Autoridades propias de los pueblos indígenas (tradicionales y representativas); Autoridades étnicas de los Consejos Comunitarios; Guardias indígenas y cimarronas; Fundación Progreso y organizaciones étnicas.

Identificación de población en situación de riesgo:

Se identifican en riesgo a pueblos indígenas y afrodescendientes del corregimiento de Jardines de Sucumbíos de Ipiales (Nariño), y a las comunidades Awá de los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Villagarzón, (Putumayo) y Piamonte (Cauca).

Existen riesgo diferenciados para: i) Las autoridades étnicas, guardias indígenas y cimarronas, así como ACIPAP y Fundación Progreso, entre otras organizaciones de los pueblos étnicos ya referidos; iii) Niñas, niños y adolescentes pertenecientes a dichas comunidades.

⁸ Num. 3º, art. 5. Decreto 025 de 2014.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO

De manera atenta me permito remitir la presente Alerta Temprana por la situación de riesgo que se presenta en:


El corregimiento de Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales (Nariño), particularmente para las veredas: Alto del Amarradero, Argentina, Brisas del Gavilán, Brisas del Rumiyocho, El Empalme, Fronteras del Amarradero, Jardines de Sucumbíos, La Playa, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Ranchería, San José de los Pinos y Santa Lucía, y de manera diferencial, para los pueblos indígenas de los Resguardos Pastos, Nasa, Awá, Kamtzá, Cofán y tres comunidades afrodescendientes organizadas en los Consejos Comunitarios Liberación y Futuro, Nuevo Renacer y Nueva Esperanza. Así como en los territorios colectivos del Pueblo Awá en los municipios de Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón (Putumayo) y Piamonte (Cauca).

Este escenario de violencia se encuentra caracterizado por la extensión de la disputa armada entre los autodenominados Comandos de la Frontera y el Frente 1° Carolina Ramírez desde los municipios del Bajo Putumayo, sumado a la posible incursión de la naciente estructura Columna Móvil Jhonier Toro Arenas perteneciente al Comando Coordinador de Occidente en todo el territorio advertido.

Es preciso anotar que este documento, no sustituye el escenario de riesgo identificado en las Alertas Tempranas expedidas para Putumayo y Cauca, especialmente la Alerta No. 013-21, para los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís, y la AT No. 001-21 que focalizó el municipio de Piamonte, donde se había advertido ya la amenaza de vulneración a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la población civil, incluyendo de varios pueblos indígenas, con ocasión de los enfrentamientos entre Comandos de la Frontera y el Frente 1° Carolina Ramírez.

Antes bien, para efectos de la presente Alerta, la Defensoría del Pueblo focaliza en riesgo a los pueblos indígenas y afrodescendientes del corregimiento de Jardines de Sucumbíos de Ipiales (Nariño), y a las comunidades Awá de los municipios de Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Villagarzón, (Putumayo) y Piamonte (Cauca), por lo cual se trata de una alerta con acento diferencial étnico-territorial, que debe ser analizada de forma armónica con las alertas tempranas antes señaladas. En ese contexto, la presente Alerta destaca las dinámicas inescindibles de violencia armada en la frontera *bidepartamental* entre Putumayo y Nariño, pero también subraya la afectación desproporcionada que estos grupos étnicos sufren en estos contextos de violencia armada.

En lo que refiere al pueblo Awá, la presente Alerta tiene en cuenta el rápido deterioro de las condiciones de seguridad presentadas en las últimas semanas para esta comunidad en Tumaco y el Resguardo Inda Sabaleta (departamento de Nariño), que se han expresado en ataques selectivos, homicidios y masacres, y que ha sido advertida en AT No. 045-19. Si

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

bien está situación no guarda conexidad directa con los factores de amenaza en el departamento de Putumayo ni con el Corregimiento de Jardines de Sucumbíos, esta advertencia considera la comunicabilidad del impacto humanitario entendiendo al Pueblo Awá como una sola etnia, con denominadores comunes en la vida comunitaria, cultura, y pervivencia en el territorio.

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que se desconozcan los riesgos de otros pueblos indígenas asentados en el departamento del Putumayo, como pudieran ser los Resguardos y Cabildos Siona, Cofán, Murui, Coreguaje, entre otros, estando estos incluidos en las AT No. 013-2021, 01-2021 y 02-2022, así como la AT No. 026-2018.

Como bien se establece en el Punto No. 3.4.9 del Acuerdo Final de Paz y el Decreto 2124 de 2017, corresponde a la Defensoría del Pueblo tener en cuenta las características particulares y propias de las poblaciones étnicas, en el marco de los procesos de monitoreo, emisión y seguimiento. Conforme a este mandato, la presente Alerta Temprana profundiza en el análisis poblacional del riesgo advertido para los Awá, reconociendo la jurisdicción del territorio étnico y materializando el enfoque étnico-territorial, sin perjuicio de poder profundizar con posterioridad en los riesgos para otros pueblos indígenas. También profundiza en los riesgos para los Consejos Comunitarios ubicados en el Corregimiento de Jardines de Sucumbíos.


Así las cosas, el seguimiento a la presente advertencia se mantendrá independiente, aunque con lecturas armónicas y coherentes con las dinámicas analizadas en las Alertas Tempranas No. 013-21, 001-21, y demás emitidas previamente. Dado el enfoque étnico de la misma, se recomienda que este puede materializarse en todas las gestiones que conciernen al Componente de Respuesta Rápida.

Finalmente sea pertinente indicar que la presente Alerta tiene una naturaleza humanitaria y cuenta con una perspectiva de derechos⁹ y de seguridad humana¹⁰. Tiene como propósito promover la adopción de medidas de prevención, atención y protección por parte de las autoridades competentes, de cara a cada uno de los factores constitutivos del riesgo, y a partir de la obligación que les asiste de emprender acciones de reacción rápida a los riesgos y amenazas que a continuación se describen. Como bien lo expone el artículo 6° del Decreto 2124 de 2017, se busca así “[...] *contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades, así como el desarrollo de capacidades sociales para la autoprotección*”. Por consiguiente, la presente Alerta NO es un documento de seguridad o de inteligencia, acciones que corresponden solo a la labor que desempeña el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.

Antes bien, se propende por resaltar e impulsar medidas asociadas a la garantía de la seguridad humana. Como bien ha referido el Secretario General de la Asamblea General

⁹ Según el numeral 2 del artículo 3 del Decreto 2124 de 2017, la perspectiva de derechos “Se basa en el respeto y la garantía de los derechos contenidos en las normas nacionales e instrumentos internacionales, relacionados con los derechos a la vida, a la integridad; libertad y seguridad personal; libertades civiles y políticas e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.”

¹⁰ Ello se deriva del enfoque plasmado explícitamente en el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

de las Naciones Unidas “[...] ninguna parte puede tener desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y no tendrá seguridad ni desarrollo si no respetan los derechos humanos. Esa relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos y la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso”¹¹. Por tanto, “[...] ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad. Para hacer frente a las amenazas a la seguridad también se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales sólidos que juntos disminuyan las probabilidades de conflictos, ayuden a superar los obstáculos que se oponen al desarrollo y promuevan las libertades humanas para todos”¹².

2. GRUPOS ARMADOS ILEGALES FUENTE DEL RIESGO

ELN

☐

OTROS GRUPOS ARMADOS ILEGALES:

Facciones disidentes de las antiguas FARC-EP:

- Frente 1° Carolina Ramírez
- Columna Móvil Jhonier Toro Arenas (CCO)
- Comandos de la Frontera

3. FACTIBLES INFRACCIONES AL D.I.H.


- Atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil
- Afectación de la población civil como consecuencia de acciones bélicas
- Utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil.
- Desplazamiento forzado de la población civil.
- Reclutamiento forzado.
- Restricciones de la movilidad.
- Confinamiento.

4. DERECHOS FUNDAMENTALES AMENAZADOS

- A la vida, la integridad, la libertad, la seguridad.
- Libertades civiles y políticas.
- Derechos de los pueblos étnicos: Autodeterminación, Autonomía territorial, Participación, Pervivencia física y cultural.
- Al respeto a la cultura, usos y costumbres propias de las comunidades indígenas y comunidades negras.

¹¹ Naciones Unidas. Seguridad humana. Informe del Secretario General, Asamblea General, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, A/64/701, 8 de marzo de 2010

¹² Ibidem

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

VALORACIÓN DEL RIESGO

I. CONTEXTO TERRITORIAL Y SOCIAL

El municipio de Ipiales (al cual pertenece el Corregimiento Jardines de Sucumbíos) se ubica en el Nudo de los Pastos, en el suroriente del departamento de Nariño, en la frontera con el Ecuador, con una extensión territorial de 1.707 kilómetros cuadrados, que representan el 5,1% del total de la extensión del territorio departamental¹³.

Ipiales limita en el norte con los municipios de Pupiales, Gualmatán, Contadero y Potosí; al sur con la República del Ecuador; al oriente con Potosí, Córdoba, Puerres y con el departamento del Putumayo, y al occidente con Aldana, Cuaspud y la República del Ecuador. El municipio está conformado por cinco corregimientos: La Victoria, Las Lajas, San Juan, Yaramal y Jardines de Sucumbíos, 73 veredas, 5 centros poblados; con una densidad poblacional para el año 2.019 es de 89,13 habitantes por km²¹⁴.

Ipiales presenta una topografía ondulada y altamente quebrada, por encontrarse en inmediaciones de la cordillera centro oriental, encontrando accidentes orográficos como los cerros: La Quinta, Troya, Francés, Negro y Páramo Palacios.¹⁵

Por su parte, el corregimiento Jardines de Sucumbíos, dentro de sus límites geográficos conecta al norte con Orito (Putumayo), al sur Ecuador y al oriente con Valle del Guamuez. Cabe resaltar que Jardines de Sucumbíos está integrado por 13 veredas¹⁶, cinco resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas de los Pastos, Nasa, Awá, Kamtzá, Cofán, y tres comunidades afrodescendientes organizadas de la siguiente manera:

Resguardo Indígena Santa Rosa Sucumbíos El Diviso de la etnia Kofán, Constituido por el INCORA, resolución 10 de 13/5/1998.

Resguardo Indígena Pastos De Rumiyocho, acuerdo 274 de 31/1/2012.

Resguardo Indígena Ishu Del Pueblo Awá, acuerdo 273 de 31/01/2012.

Resguardo Indígena Nasa Uh, acuerdo 276 de 31/01/2012.

Resguardo Indígena Ukumari Kankhe Del Pueblo Cofán.

Consejo Comunitario Liberación Y Futuro, resolución 2801 de 13/12/2012 por INCODER.

Consejo Comunitario Nuevo Renacer, resolución 2800 de 13/12/2012 por INCODER.

Consejo Comunitario Nueva Esperanza, resolución 2799 de 13/12/2012 por INCODER.


Cabe destacar que consejos Comunitarios, algunos Resguardos y la comunidad en general se han asociado a través de la Fundación El Progreso. Esta organización nace en el 2003 para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona, debido a los hostigamientos a la población civil por parte de actores armados legales e ilegales, así como la persecución de líderes comunitarios, los continuos combates bélicos a causa de la fumigación de los cultivos de coca, y para instar una mayor presencia institucional. La

¹³ Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: “Hablamos con Hechos”.

¹⁴ Ibidem

¹⁵ Plan de desarrollo municipal 2016-2019: “Ipiales Capital del Sur”

¹⁶ Alto del Amarradero, Argentina, Brisas del Gavilán, Brisas del Rumiyocho, El Empalme, Fronteras del Amarradero, Jardines de Sucumbíos, La Playa, Libertad, Paraíso de Sapoyaco, Ranchería, San José de los Pinos y Santa Lucía.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Fundación El Progreso agrupa buena parte de los habitantes del Corregimiento, sin diferencias étnicas o de condición, y permanece vigente como un símbolo de resistencia civil en el territorio.

De acuerdo con los datos del Plan de Desarrollo Integral Cofanía-Jardines de Sucumbíos, en el territorio habitan 2.703 habitantes de 697 familias, de las cuales “[...] el 21% pertenece a los pueblos indígenas de las etnias Pasto, Cofán, Nasa y Awá y el 15% pertenece a los Consejos Comunitarios”¹⁷.

Valga resaltar la importancia geoestratégica del corregimiento de Jardines de Sucumbíos, por encontrarse ubicado entre el piedemonte oriental y la llanura amazónica. Esta zona ha sido empleada durante décadas como corredor estratégico para el dominio territorial de economías ilícitas y control social por diferentes grupos armados ilegales, que se han desplegado a lo largo del río San Miguel y el sector amazónico de su cuenca. Históricamente, los grupos armados ilegales han encontrado particularmente en la frontera, un lugar propicio para el desarrollo de actividades y el fortalecimiento de sus finanzas, dentro de las cuales sobresalen el narcotráfico y el contrabando de mercancías que se mueven en los dos sentidos, sin mayores controles estatales, resaltando entre estos movimientos, el tráfico de armamento y municiones en la selvática frontera.


También resulta relevante mencionar la presencia en la zona del Oleoducto trasandino, y conexiones Mansoya - Orito, San Miguel - Orito, Churuyaco - Orito, lo que además incluye pozos de extracción de crudo.

En lo que refiere al Pueblo Awá, este se encuentra ubicado geográficamente en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, de la ramificación de la Cordillera Oriental en Colombia, sobre el piedemonte andino amazónico, entre los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca. En el departamento de Nariño, como ya se vio, se encuentran entre otros, en el corregimiento Cofanía Jardines de Sucumbíos. En el departamento del Putumayo, se localizan en los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle Del Guamuez y San Miguel y, en el departamento del Cauca, en el municipio de Piamonte.


El territorio Awá hace parte de la de la zona de integración fronteriza entre Colombia y Ecuador, y está bañado por los siguientes ríos y quebradas: San Juan, Vides, Conejo, Putumayo, Guineo, Orito, El Caldero, El Quebradón, Agua Amarilla, Agua Negra, Güisía, Convoy, quebrada Cristalina, quebrada Güisita, quebrada el Sábalo, el río La Hormiga y el río Guamuez. En este sentido, la geografía de la zona se considera estratégica en tanto permite la consolidación de rutas fluviales a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo para enlazar con la frontera colombo ecuatoriana.

Las comunidades del pueblo Awá se encuentran distribuidas de la siguiente manera en el departamento de Putumayo:

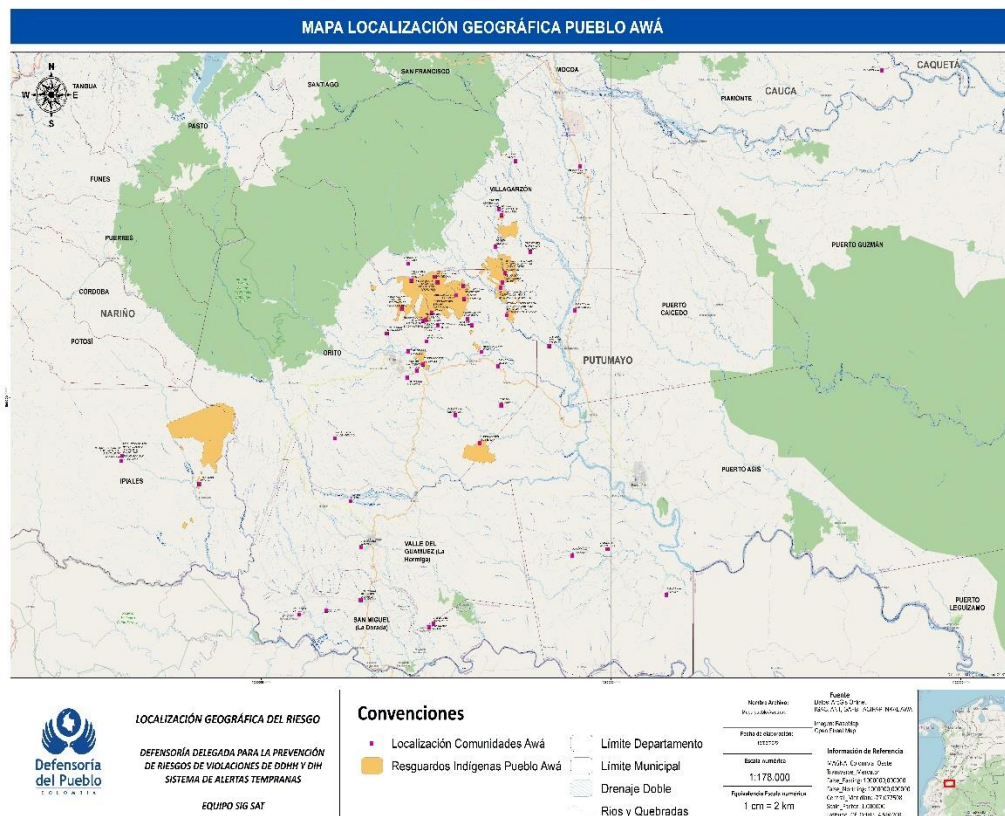
¹⁷ Plan de Desarrollo Integral Cofanía Jardines de Sucumbíos. Ipiales - Nariño. 2012


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Cabildo / Resguardo	Municipio
Cabildo Indígena Alto Temblon	
Cabildo Indígena Playa Rica	
Cabildo Indígena Alnamawami	
Cabildo Indígena Yarymo Pilt Kwazi	
Cabildo Indígena Awá Sevilla	
Cabildo Indígena Pibi Pai	
Cabildo Indígena Valle Hermoso	
Cabildo Indígena Awá Blanca Piedra Verde	
Cabildo Indígena Mainkin Su	
Resguardo Indígena Los Guadales	
Cabildo Indígena Damajawa	
Cabildo Indígena El Chanul	
Cabildo Indígena La Turbia	Orito
Resguardo Indígena El Espingo	
Resguardo Indígena Selva Verde	
Resguardo Indígena Caicedonia	
Resguardo Indígena Cañaveral Miraflores	
Resguardo Indígena Bellavista	
Resguardo Indígena Aguablanca	
Resguardo Indígena Inkal Watsal	
Resguardo Indígena Inkalawá	
Cabildo Indígena Kuisminda	
Cabildo Indígena Awá In Marein	
Cabildo Indígena Sindawa Alto Tesalia	
Resguardo Indígena San Andrés - Villa Unión - Las Vegas	Puerto Caicedo
Resguardo Indígena Damasco Vides	
Cabildo Indígena Awá Campo Bello	
Cabildo Indígena Brisas Del Palay	
Resguardo Indígena Playa Larga	
Cabildo Indígena Siloé	
Cabildo Indígena Florida Alto Sardina	
Cabildo Indígena Mayasquer Awá	
Cabildo Indígena Katza T+	Villagarzón
Cabildo Indígena Alto Chawi Piedra Pintada	
Cabildo Indígena Awá Tatchan	
Cabildo Indígena Awá Im	
	Valle Del Guamuez

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Cabildo Indígena Alto Convoy	
Resguardo Indígena Ishuawá	Ipiales Nariño
Resguardo Indígena Irak Cristalina li	
Cabildo Indígena Monterey	San Miguel
Cabildo Indígena La Raya	
Cabildo Indígena Awá Wan Makna La Dorada	
Cabildo Indígena La Cabaña	
Cabildo Indígena Awá Villa Del Sol	Puerto Asís
Cabildo Indígena La Planada	
Cabildo Indígena Sindawa Awá	Piamonte (Cauca)



	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Con respecto a la distribución demográfica de la población se tiene lo siguiente:

MUNICIPIO	POBLACION	0-5 AÑOS	6-12 AÑOS	13-18 AÑOS	19-29 AÑOS	30-65 AÑOS	65-100 AÑOS
Orito	3471	285	517	463	869	1156	137
Puerto Asís	223	27	33	36	53	68	6
Valle Del Guamuez	642	32	75	75	197	242	24
Puerto Caicedo	804	58	128	83	205	303	29
Villagarzón	453	17	77	63	110	154	23
San Miguel La Dorada	1676	57	190	232	473	625	95
Jardines De Sucumbíos	290	14	46	51	81	82	17
Piamonte - Cauca	113	10	22	11	27	39	6
Total	7672	500	1088	1014	2015	2669	337

II. CONTEXTO DE AMENAZA


2.1. Antecedentes del contexto de amenaza:

Tras la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP, entre 2016 y 2018, se evidenció un proceso de reconfiguración de los actores armados ilegales en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos que, para entonces incluía a grupos de crimen organizado, constituidos con posterioridad a la desmovilización de las antiguas AUC (La Construy y La Mafia) y que venían operando principalmente en cascos urbanos de varios municipios del Putumayo.

En este último departamento, tal como se indicó en Alerta Temprana No. 013-21, se registró la presencia y consolidación de la Facción Disidente de las antiguas FARC-EP, autodenominada Frente 1° Carolina Ramírez, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo, ingresando por el municipio de Puerto Guzmán, desde el 2018. En estos territorios, dicha Facción empezó a disputarles el control territorial con La Construy y La Mafia, tal como se refirió en las Alertas Tempranas N° 040-19 (Puerto Asís), N.° 048-20 (Puerto Leguizamo) y N.° 001- 21 (Puerto Guzmán).

Para el 2019, conforme a lo monitoreado en AT No. 013-21, La Mafia habría tenido “[...] *mayor influencia en los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Orito y el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos, en el municipio de Ipiales. [...] también estarían haciendo presencia en Ecuador, con campamentos de entrenamiento.*”

En julio de 2020, La Mafia - Sinaloa “*habría modificado su denominación como táctica de posicionamiento territorial, en un intento por aglutinar estructuras armadas ilegales de*

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

menor envergadura como Los Bonitos y los Azules y, aparentemente, con el fin de desmarcarse de la comisión de algunas prácticas violentas, entre las que se encuentran, asesinatos de líderes sociales".¹⁸ A partir de este momento, y conforme a diversos panfletos, la agrupación pasó a autodenominarse como Comandos de la Frontera.

En el primer semestre del 2021, los Comandos de la Frontera declararon su adhesión a la Facción Disidente de las antiguas FARC-EP autodenominada ‘Segunda Marquetalia’¹⁹, adquiriendo el título de Ejército Bolivariano. Tal como se estableció en la AT No. 02-2022, la adscripción de Comandos de la Frontera pudo haber profundizado las disputas territoriales con el Frente 1º Carolina Ramírez.

Conforme lo expuesto, en el segundo semestre del 2021, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana No. 013-21, para los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Caicedo. En este instrumento, se señaló como población en riesgo a los pueblos étnicos asentados sobre estos municipios del Bajo Putumayo, entre ellos el pueblo Awá. Al momento de emisión de dicha advertencia, Comandos de la Frontera se había logrado consolidar como actor hegemónico en la frontera departamental de Nariño y Putumayo, particularmente en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos.


En dicha advertencia se alude al Especial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad “La Verdad Indígena”, resaltando que la existencia de diversos corredores con presencia histórica de actores armados en territorios de los pueblos étnicos, entre ellos el existente “*hacia el Sur de Nariño, su conexión con Ecuador y el corredor del Sur del Cauca y Cordillera Nariñense, (que) siguen siendo utilizados por los actores armados ilegales que persisten en el departamento de Putumayo [...]*”. En este escenario se consideraron además las presiones a las comunidades indígenas y afrodescendientes que imponen los actores armados, aprovechando su influencia, y los férreos ejercicios de control territorial y poblacional, a saber: “*[...] se ha encontrado que los actores armados ilegales vienen presionando los territorios de los pueblos étnicos, particularmente a las poblaciones indígenas, para hacer aprovechamiento de la protección especial con la que ellas cuentan con el fin de hacer uso de sus territorios principalmente para cultivos de uso ilícito y de afectar los mecanismos de consulta previa para toda actividad que se desarrolle en estas comunidades. Con ello han afectado a su población, su autonomía, el ejercicio del gobierno propio, la protección de su territorio y la pervivencia de su identidad étnica.*”²⁰

Sobre la afectación a los liderazgos y autoridades indígenas y afrodescendientes, se indicó que la situación de riesgo supone impactos significativos en la estructura organizativa de estas comunidades, a través de estos para la pervivencia física y cultural de los pueblos, su autonomía, la protección de su territorio y la garantía de su identidad étnica.

¹⁸ AT No. 13-21 Pág. 18

¹⁹ FARC-EP. (15 de marzo de 2021). Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Recuperado el 18 de mayo de 2021 en <http://farc-ep.net/?p=3244> “Anunciamos que en la Dirección Nacional de las FARC-EP (Segunda Marquetalia) queda incluida con voz y con voto en el mismo nivel de conducción y decisión que el del conjunto de los demás integrantes de esta instancia político-militar de mando, la representación de la Dirección de los Comandos Defensores de Frontera (Ejército Bolivariano)”.

²⁰ AT No. 13-2021 Pág. 26

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

En el 2022, y tras el recrudecimiento de la disputa armada entre el Frente 1° Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera en el municipio de Puerto Leguízamo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) declaró la existencia de un conflicto armado no internacional entre las estructuras referidas, en virtud de la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades.

2.2. Contexto actual de amenaza


Desde la emisión de la Alerta Temprana 013-21, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de un reacomodamiento de los actores del conflicto armado que incrementan los riesgos advertidos contra la población civil en los municipios considerados en riesgo, en particular para el pueblo Awá en Putumayo, Piamonte (Cauca) y para los pueblos étnicos asentados en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos. Se trata de la expansión de la disputa territorial de las facciones disidentes Comandos de la Frontera y del Frente 1° Carolina desde el Bajo Putumayo, cuyos repertorios violentos han tenido una importante afectación diferencial sobre dichas comunidades.

Muchos de estos riesgos se han acentuado por la limitada implementación de las medidas institucionales anteriormente descritas, la mayoría de ellas estructurales, y que han tenido como objeto prevenir el exterminio físico y cultural del pueblo Awá, como de otros pueblos indígenas y afrodescendientes incluidos en la presente Alerta Temprana.

De acuerdo a la información disponible, Comandos de la Frontera ha tenido presencia permanente en Jardines de Sucumbíos desde 2021, particularmente sobre el corredor fronterizo con la vecina República del Ecuador y las veredas Gavilanes, Brisas del Rumiyo, Paraíso Sapoyaco, Argentina, Alto Amarradero, sector de la trocha y en los territorios pertenecientes a los Consejos Comunitarios asociados a Asocafrain. Desde dicha anualidad, este actor armado se habría erigido como hegemónico, apropiándose de las rutas para el narcotráfico, así como ejerciendo una fuerte presión sobre la vida comunitaria de la población.

En este marco, se presentaron restricciones a la movilidad por las vías que conectan el Corregimiento con el departamento del Putumayo, incluyendo el cruce y la navegación por el río Rumiyo. En el 2021 circuló, además, un audio y mensajes por WhatsApp en los que se señala la prohibición al tránsito, salidas e ingresos de miembros de la comunidad después de la 6 de la tarde, so pena de ser declarado objetivo militar. Las restricciones anotadas habrían afectado al ejercicio de las prácticas culturales de los pueblos étnicos asentados en la zona, como es el caso de la caza, la pesca y la utilización de ciertas zonas para adelantar la medicina tradicional y los rituales que realizan en el Río Rumiyo.

A las constantes restricciones de movilidad se sumarían diversas retenciones a la población civil, siendo estas frecuentemente interrogadas y amenazadas, señalando que "*a los chismosos los van matar*", así como demandando lealtades, información y/o favores de diversa índole por parte de la comunidad, que incluyen alimentación, traslado, ocultamiento, entre otros.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

Así, por ejemplo, en julio de 2021 un miembro de una comunidad indígena fue sacado de su vivienda de manera forzada, retenido y torturado durante días por personas que dijeron pertenecer a los Comandos de la Frontera. Estás habrían requerido información sobre la comunidad como condición para su liberación. Dos días después del regreso del secuestrado, apareció un cadáver (sin identificar) con cadenas en el río, en la zona de los Consejos Comunitarios.

La situación de amenazas permanente entre el 2021 y 2022 habría generado que algunos líderes y miembros de la comunidad, especialmente la perteneciente a los consejos comunitarios, salieran del territorio ubicándose en los municipios de Orito y la Hormiga, donde la posición de los Comandos de la Frontera se encuentra en disputa.


Ahora bien, a finales de abril de 2022, se identificó la presunta incursión de hombres pertenecientes al denominado **Frente 1° Carolina Ramírez** (grupo cercano a la línea de las facciones disidentes de 'Gentil Duarte') en Jardines de Sucumbíos, provenientes al parecer del departamento del Caquetá y otros municipios del Bajo Putumayo, con el objetivo de obtener el control de la franja de frontera en la cual hacen presencia los Comandos de la Frontera. Este hecho supone la extensión de la disputa armada entre ambas estructuras desde los municipios de Orito, San Miguel y otros advertidos en AT No. 013-21. Con todo, no es claro si el ingreso se produjo por parte de la Columna Jhonier Toro Arenas, como se verá más adelante.

La entrada en Jardines de Sucumbíos del Frente 1 Carolina Ramírez generó varios desplazamientos en la zona, tras confirmarse al menos un muerto y un herido en hechos registrados a principios de mayo. De acuerdo con versiones no oficiales, el occiso habría tenido algún grado de relacionamiento con los autodenominados Comandos de la Frontera.

Como respuesta al ingreso de esta estructura ilegal, se habrían intensificado las medidas de control sobre la población de parte de los Comandos de la Frontera a través de severas restricciones de movilidad. Por su parte, el Frente 1° Carolina Ramírez habría realizado señalamientos sobre la población civil, convocando a reuniones con el objeto de impartir nuevos órdenes armados, principalmente relacionados al control de la economía de la coca.

El día 3 mayo en horas de la mañana fue retenido un comunero indígena, al parecer por el Frente 1ro Carolina Ramírez, quienes le habrían informado "*que estuviera pendiente que podía presentarse un enfrentamiento y que tenía que salir toda la población*". Este mensaje habría causado profundo temor y zozobra entre las comunidades, suscitando una convocatoria a asamblea permanente para decidir si se concentrase o no la población indígena de manera indefinida en lugares considerados menos vulnerables.

Por su parte, los tres Consejos Comunitarios presentes en la zona limitaron la salida de los estudiantes afrodescendientes al colegio del Empalme, quienes tienen que cruzar habitualmente el Río Rumiyaco para poder asistir a clases, como medida de precaución al actuar de los violentos. Si bien en este contexto se registró el retorno de algunas familias que habían sido desplazadas hacia la Hormiga, en el municipio del Valle del Guamuez, se

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

advierte un fuerte riesgo de desplazamiento para los Consejos referidos, por cuánto su ubicación geográfica coincide con el corredor fronterizo dónde están presuntamente apostados los Comandos de la Frontera.

El riesgo de reclutamiento forzado se encuentra complementemente acreditado sobre las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, respecto de las cuales, ambos actores estarían realizando ofertas a niñas, niños y adolescentes para hacer parte de las estructuras armadas. Particularmente los Comandos de la Frontera, estarían captando a los menores de edad a través de anuncios de pagos o mediante el suministro de sustancias psicoactivas. Al menos dos jóvenes en recuperación de consumo de droga habrían manifestado presiones para unirse a este actor armado.


El 9 de mayo de 2022, en horas de la madrugada según información triangulada se registraron hostigamientos entre los dos grupos armados ilegales ya referidos en las veredas Brisas de Rumiyaco y la Libertad. De igual manera habitantes de la Vereda Santa Lucia reportan la presencia de estas dos estructuras armadas y el temor a ser víctimas del fuego cruzado, razón por la cual manifiestan estar viviendo dentro de una zozobra y temor generalizado lo cual motivó la suspensión de clases en los centros educativos de todo el Corregimiento.

Por otro lado, miembros de la comunidad alegan que no pueden pedir ayuda a la Fuerza Pública presente en la zona, porque existen versiones que indican que Comandos de la Frontera tendría supuestos informantes a su interior. Según dichas versiones, algunas personas estarían recibiendo posibles pagos para que conocer quienes están presentando las quejas y denuncias respecto a su accionar armado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha señalado por su parte que *“A pesar de la fuerte presencia militar de la Brigada XXVII de Selva del ejército, los armados siguen imponiendo y afectando profundamente la vida los pobladores de Jardines de Sucumbíos.”*²¹

Ahora bien, en el marco del Seguimiento a la AT No. 013-21 emitida para los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Caicedo, se ha hecho tangible la afectación humanitaria diferenciada y desproporcional que el pueblo Awá asentado en el Bajo Putumayo y en Jardines de Sucumbíos presenta con ocasión del reacomodamiento de los actores armados ya referidos, puntualmente el posible ingreso del Frente 1º Carolina Ramírez en zonas de presencia prácticamente hegemónica de Comandos de la Frontera y de las estructuras armadas articuladas a esta organización.

Así pues, debe señalarse que las limitaciones para el tránsito libre por su territorio no son nuevas para el pueblo Awá, quien se ha visto afectado persistentemente por el conflicto armado, ya través de la ocupación de su territorio o el tránsito de actores armados estatales y no estatales. Esta afectación constante ha menoscabado, como señalan sus líderes, *“el equilibrio y armonía con el territorio”*. Actividades como la caza, la pesca, el acceso a ríos o quebradas se han visto limitadas, por los órdenes impuestas por el actor

²¹ Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Enfrentamientos y disputas territoriales de grupos armados con afecciones profundas a población civil en corregimiento Sucumbíos Ipiales Nariño. Destacado. Informes. Publicado el: 10/05/22 <https://www.justiciaypazcolombia.com/enfrentamientos-y-disputas-territoriales-de-grupos-armados-con-afecciones-profundas-a-poblacion-civil-en-corregimiento-sucumbios-ipiales-narino/>

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


armado no estatal y/o por la presencia de actores armados en los caminos y las rutas fluviales que caracterizan el territorio Awá. El control sobre la movilidad de las poblaciones étnicas y no étnicas es de tal envergadura que, en algunos sectores de la zona rural de los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, se ha carnetizado a la población o se ha amenazado con hacerlo; asimismo se ha ordenado a las autoridades étnicas, que no pueden ingresar a su territorio personas desconocidas y que de hacerlo deben, como individuos o comunidad, asumir la responsabilidad de y por los visitantes.

De igual manera, Comandos de la Frontera estaría presionando a las autoridades étnicas para que faciliten los censos de tierras, como parte de un ejercicio de mayor control sobre la economía de la coca. Estas comunidades han resistido a las órdenes impuestas por los actores armados no estatales, manifestando entre otras cosas, la necesidad de que se respeten sus derechos étnicos. Con todo, la actual dinámica del conflicto armado y el accionar de esta agrupación armada vulneran derechos y libertades de la población civil y el Derecho Internacional Humanitario (distinción, proporcionalidad y precaución). Esta situación se complejiza cuando se ha identificado como frecuente que el personal armado de esta agrupación no se presente bajo denominación alguna o se cambien el nombre constantemente, retomado incluso los nombres de Sinaloa, La Mafia o La Empresa. Por regla general, Comandos de la Frontera no utiliza camuflados en estos territorios, lo que incrementa los riesgos, en tanto pueden infiltrarse directamente en las comunidades.

En la misma línea están los continuos llamados que se han hecho a las autoridades étnicas para asistir a reuniones que los actores armados convocan, particularmente a los/las gobernadores/as, con propósitos de impartir órdenes a la comunidad. Por ejemplo, cuando hay un cambio de personal se cita y reúnen a las comunidades y presentan a sus comisionistas y personal al mando. Esto mismo acontece cuando hay un relevo en sus jefaturas, lo que, conforme al seguimiento efectuado, sucede frecuentemente, en promedio cada dos o tres meses. Esta situación refleja cambios bruscos y continuos en las dinámicas de relacionamiento con las comunidades, así como un impacto directo sobre su gobierno propio.

Otra estrategia que se ha reconocido en Comandos de la Frontera es su intento por involucrarse directamente con las comunidades étnicas a través de diferentes mecanismos, como el uso, utilización y reclutamiento de personas, el enamoramiento, y la injerencia sobre sus procesos organizativos, casi en una búsqueda por controlar la cotidianidad comunitaria. Una conducta vulneratoria asociada a este ejercicio del control sobre la vida social de las comunidades es la imposición de sanciones, como multas, golpes, desplazamientos u homicidios, cuando se incumple con alguna de sus órdenes o se interfiere con alguno de sus intereses. En el último trimestre del 2021, se registraron dos eventos de homicidios de personas Awá en los municipios de San Miguel y Orito, que entre otras cosas llevaron al desplazamiento de familias de este pueblo. El hecho fue presuntamente cometido por Comandos de la Frontera.

Adicionalmente está un alto riesgo de reclutamiento forzado, derivado de amenazas a las comunidades del pueblo Awá respecto de personas mayores de 15 años, esto con el objeto de ampliar su personal armado ante posibles enfrentamientos con otras agrupaciones. Se ha conocido sobre una mayor presión de parte de Comandos de la Frontera, para la

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

vinculación de población Awá a sus filas, a través de la seducción de las personas jóvenes, particularmente de quienes han recibido entrenamiento militar, ofreciendo pagos por su vinculación de aproximadamente 2 millones de pesos.

Todo este escenario, por supuesto, incrementa los riesgos para el ejercicio de las labores propias de las autoridades étnicas, tanto políticas (representativas) como espirituales (tradicionales), e incide sobre la cohesión comunitaria, tal como ha sido expresado en su Plan de Salvaguarda: “[...] colocando en riesgo todos los esfuerzos de reencontrarnos con la cultura propia, nuestros usos, costumbres, valores y tradiciones y afectando nuestros sistemas organizativos propios, el ejercicio de la autonomía y la unidad de la Familia Awá”.²²

Cabe anotar que, a finales del mes de junio de 2022, la Defensoría también reportó situaciones de confinamiento en el resguardo Ishu Awá, ubicado en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos, a cuenta de los Comandos de la Frontera. Según se corroboró, las familias de la etnia Awá no podrían ingresar a sus chagras y algunas viviendas estaban siendo utilizadas por este grupo.

Por otro lado, el día 26 de junio de 2022, este grupo habría asesinado a una persona frente a la casa del Cabildo, hecho que fue tomado por algunos miembros de la comunidad como una amenaza directa. Según se reportó en dicho momento, Comandos de la Frontera estaría instalando los campamentos dentro del Resguardo Ishu Awam, para la práctica polígono y entrenamiento.


Al escenario de reacomodamiento y disputa de armada entre los autodenominados Comandos de la Frontera y el Frente 1° Carolina Ramírez, se suma el reciente ingreso de la autodenominada Columna Móvil Jhonier Toro Arenas.

Varios panfletos que han circulado desde el mes de mayo en los municipios de Puerto Caicedo, Orito y Villagarzón, dan cuenta del presunto ingreso de esta nueva estructura al territorio. Conforme a comunicación de esta agrupación en el mes de julio, la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas pertenecería al Comando Coordinador de Occidente.

Lo monitoreado en territorio parece señalar que la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas podría tener un mayor grado de articulación con el Frente 1° Carolina Ramírez, actor armado que ha tenido presencia en el departamento del Putumayo desde el 2018. Cabe recordar que, tanto el Comando Coordinador de Occidente como el Frente 1° Carolina Ramírez, habrían estado bajo las órdenes de Gentil Duarte, en el propósito común de generar un control territorial conjunto en el suroccidente colombiano.

El 30 de mayo de 2022 en la vereda Altos del Amarradero del Consejo Comunitario Nueva Esperanza tras la incursión de la nueva Columna Móvil Jhonier Toro Arenas, el Frente Carolina Ramírez presuntamente asesinaron a una persona e hirieron a otra de la población civil. De manera posterior impusieron toque de queda de 6am a 6pm en todo el

²² Organizaciones del Pueblo Awá UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP. 2012. Actualización del Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá. Disponible en: http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2017-12-08/388788/anexos/1_1512720955.pdf

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos. Bajo la incursión de este nuevo grupo armado y la inminente disputa armada con los Comandos de la Frontera, según la información de la comunidad varias familias de la zona tuvieron que desplazarse cruzando el río San Miguel hacia territorio ecuatoriano y otras saliendo hacia lugares como San Miguel, La Hormiga y Orito (Putumayo), así mismo y por el riesgo inminente de confrontación se suspendieron las clases en los centros educativos de los Consejos Comunitarios

Para finales del mes de junio, se registró la presencia de hombres armados que se identificaron como integrantes de la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y en la frontera de Villagarzón.

Valga señalar que, sobre la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas, se han documentado además diversos grafitis pintados sobre carros de transporte público, así como la coacción a los transportadores para que los mantengan por al menos el término de dos meses, como símbolo de control del territorio.


El día 05 de julio de 2022, circuló un panfleto a nombre de la Columna Móvil Jhonier Toro Arenas en el que se lee : *“a partir del día miércoles 06 de julio del presente año queda prohibida la movilidad en las zonas rurales de los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo, Orito y el corregimiento de Jardines de Sucumbíos en Ipiales Nariño, desde las 06 horas de la tarde hasta las 06 horas de la mañana del día jueves 07 de julio, estableciéndose el mismo horario para los días en adelante hasta nueva orden, Esto en aras de salvaguardar la integridad de las comunidades. Razón por la cual hacemos el llamado a acatar estas orientaciones para evitar lesionar personas, que nada tenga que ver con el conflicto que libramos contra el ejército mercenario de Colombia y sus aparatos paramilitares al servicio del narcotráfico y capital transnacionales”*.

Por todo lo mencionado previamente, la presente alerta Temprana tiene el objeto, que las autoridades, materialicen todas las acciones de prevención y protección indispensables para salvaguardar los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad, y de manera diferencial los derechos de las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes asentadas en la zona, incluyendo el derecho a la autodeterminación, autonomía territorial, participación y la pervivencia física y cultural.

III. VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES

Para efectos de la presente Alerta, las vulnerabilidades y capacidades se analizarán de forma conjunta, entendiendo que algunos factores, tanto comunitarios como institucionales, dependiendo del contexto, pueden fungir como una u otra.

En primer lugar, organizativamente, el pueblo Awá se encuentra recogido en la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo - ACIPAP INKAL AWÁ, integrando también a la comunidad de Jardines de Sucumbíos y Piamonte - Cauca. De acuerdo con su Plan de Salvaguarda, la organización nació en 1996 bajo el nombre de Organización indígena del Pueblo Awá - OIPA y en el año 2000 tras un ejercicio colectivo de

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

reestructuración organizacional, constituyen ACIPAP²³.

Vale la pena señalar que el pueblo Awá ha sido sujeto de diversas decisiones normativas y jurisprudenciales para la garantía de su protección y pervivencia como pueblo: tanto las establecidas por la Constitución Política de 1991, en el marco del reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos, como la incorporación de tratados internacionales al bloque de constitucionalidad y las diferentes sentencias emitidas por la Corte Constitucional que ha reiterado el carácter de *“sujetos colectivos de derechos y decisión”*²⁴ de los pueblos indígenas.

En el Auto 004 de 2009, por ejemplo, la Corte Constitucional señaló la importancia de construir o implementar los planes de salvaguarda para pueblos étnicos en riesgo extremo, entre ellos el del pueblo Awá, debido a que *“Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza “permanente, sistemática y generalizada”, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano”*²⁵.

A lo anterior, en concepto de la Honorable Corte, se suman factores estructurales como *“altas migraciones de no indígenas (afrodescendientes, colonos, mestizos y campesinos) al territorio; la llegada de la coca, el narcotráfico y las fumigaciones; la violencia extrema del conflicto armado; y el desplazamiento forzado. Esta situación incide directamente sobre su tejido social y su integridad cultural”*²⁶, situación que persiste 13 años después de la promulgación de este Auto.

En el 2010 a través del Decreto 1137 el Ministerio del Interior creó la Mesa de Concertación para el Pueblo Awá y en 2012 se realizó una actualización al Plan de Salvaguarda de este pueblo, sin embargo, de acuerdo con lo que se ha comunicado a este Despacho: *“El plan de salvaguarda es uno de los elementos que menos le ha prestado atención desde las instituciones del gobierno nacional, regional y local. Metodológicamente tiene tres espacios para la concertación y la implementación: concertación, protocolización y acuerdos; hemos estado en la etapa de concertación de los componentes, pero ya llevamos desde el año 2012 hasta la fecha 2022, sin tener avances significativos, sin poder terminar de consolidar y concertar los componentes del Plan de Salvaguarda. Es prioritario y pertinente darle una salida urgente, ya que está en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Awá en el territorio, el plan el Plan de Salvaguarda es la estrategia rectora para darle cumplimiento al Plan de Vida del pueblo Awá en el departamento del Putumayo, Nariño y Cauca”*. (Trabajo de campo, junio 2022).


Asimismo, y dadas las continuas situaciones de riesgo, marcadas mayormente por cuenta

²³ Organizaciones del Pueblo Awá UNIPA, CAMAWARI y ACIPAP. 2012. Actualización del Plan de Salvaguarda del Pueblo Awá. Disponible en: http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2017-12-08/388788/anexos/1_1512720955.pdf

²⁴ Defensoría del Pueblo. 2008. Resolución Defensorial N° 53 Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del pueblo indígena Awá del Departamento de Nariño.

²⁵ Corte Constitucional de Colombia. 2009. Auto de Seguimiento 004.2009. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm>

²⁶ Ibid.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

del conflicto armado en contra del pueblo Awá en Nariño y Putumayo, se recurrió a instancias internacionales en procura del establecimiento de acciones estatales para disminuir tanto los factores de riesgo como sus impactos sobre este pueblo, es así como en el 16 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó la adopción de medidas cautelares con el objeto de *“proteger la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Awá de los Departamentos de Nariño y Putumayo”*²⁷.


Para el año 2011 nuevamente la Honorable Corte Constitucional a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de cumplimiento, emitió el Auto 174 de 2011, con la referencia: *“Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Awá, ubicado en los departamentos de Nariño y Putumayo, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009”*, en cuyo marco se señala²⁸: *“Que, de acuerdo con informes allegados a esta Corporación, se evidenció la grave afectación de los derechos individuales y colectivos del Pueblo Indígena Awá por el conflicto armado y el desplazamiento, por lo que dicha comunidad tradicional fue incluida entre aquellas en mayor riesgo de desaparición, protegidas en el auto 004 de 2009: (...) “Los derechos fundamentales individuales y colectivos del pueblo Awá están sujetos a violaciones de naturaleza “permanente, sistemática y generalizada”, derivadas de infracciones constantes del Derecho Internacional Humanitario por todos los actores enfrentados en el conflicto armado colombiano. Es de tal gravedad esta afectación, que la Defensoría del Pueblo en Nariño emitió en 2007 un informe defensorial como mecanismo para visibilizar su crítica situación. Para la Corte Constitucional no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.”*

Sumado a ello, el pueblo Awá ha sido sujeto de medidas establecidas en el marco de la Ley 1448 de 2011, específicamente planes de retornos y reubicaciones y procesos de reparación colectiva, que requieren ser atendidos y priorizados como mecanismos de prevención y protección de las comunidades beneficiadas de estos procesos, máxime en lo que concierne al cumplimiento del principio de seguridad (retornos) y las medidas de no repetición (reparación colectiva).

Ahora bien, debe añadirse a lo anterior que el pueblo Awá tiene comunidades localizadas sobre la proximidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, como son:

²⁷ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2011. MC-61-11.

²⁸ Auto 174 de 2011, consultado en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2011/a174-11.htm>, el 3 de julio de 2022.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


Municipio	Cabildo/Resguardo
Villagarzón	Resguardo Awá Mayasquer
Puerto Asís	Cabildo Awá La Cabaña Cabildo Villa del Sol Cabildo La Planada
Orito	Cabildo Alnamawami Cabildo Awá Sevilla Cabildo Playa Rica Cabildo Yarumo pilkuazi Cabildo Alto Temblón Resguardo Awá Blanca Resguardo Los Guaduales Resguardo Cañaveral Miraflores
Valle del Guamuez	Cabildo Awá Tachan Cabildo Awá Im
San Miguel	Cabildo Monterrey, Cabildo La Raya, Resguardo IRAK Cristalina II
Ipiiales	Resguardo Ishu Awá

Esta actividad económica ha tenido diversos impactos sobre el pueblo Awá. Por una parte, está la falta de implementación adecuada del mecanismo de consulta previa e informada para adelantar estos proyectos. Por otro lado, estos han distado de la satisfacción de las necesidades territoriales del pueblo Awá, quienes acusan una “desarticulación y desarmonización el territorio”, por la contaminación de las fuentes de agua, la extinción de animales, afectación las actividades de subsistencia como la pesca y la cacería, fundamentales para la soberanía alimentaria. Desde el aspecto social, estas intervenciones han generado divisiones al interior de los cabildos y resguardos, ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados en sus territorios y promovido la intimidación hacia sus liderazgos y sus comunidades.


Frente a lo anterior, es importante señalar que el pueblo Awá ha venido solicitando como parte de sus derechos como sujetos étnicos y en procura de las garantías de protección para sus comunidades, la constitución, el saneamiento y la ampliación de sus territorios. A continuación, se presentan las necesidades identificadas sobre este aspecto:

DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL PUEBLO AWA DEL PUTUMAYO ACIPAP - AWÁ 2021 ²⁹									
ITE M	Municipio	Comunidad/ Resguardo	Flías.	Nº Pnas.	Estado legal del territorio	Nro. Has/ titulada, en proceso de ampliación y en solicitud de constitución de Resguardo			Proceso con la URT
						Titulad as	En proceso de ampliación	En solicitud de constituci ón	
1	Orito	Resguardo Guaduales	110	286	Resguardo constituido	291			Priorizado
2		Resguardo Bellavista	53	133	Resguardo constituido	904	1600		Priorizado
3		Resguardo Cañaveral	64	226	Resguardo constituido	1981	200		Priorizado


²⁹ El trámite priorizado ante la UNP depende de si es resguardo o cabildo, en el caso de los resguardos el trámite es de ampliación o saneamiento; en el caso de los cabildos el trámite es de constitución.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

4	Resguardo Caicedonia	101	237	Resguardo constituido y solicitud de compra de tierra	1009			Priorizado
5	Resguardo Espingo	64	190	Resguardo constituido	1947			Priorizado
6	Resguardo Selva Verde	20	83	Resguardo constituido y solicitud de ampliación	247	20		Priorizado
7	Resguardo Agua Blanca	64	200	Resguardo constituido y solicitud de ampliación	1254	100		Priorizado
8	Resguardo Inkál Awá	37	121	Resguardo constituido	109			Priorizado
9	Resguardo Inkál Watzal	52	130	Resguardo constituido y solicitud de ampliación	347	150		Priorizado
10	Cabildo La Turbia	25	78	Trámite administrativo de constitución			450	Priorizado
11	Cabildo Alnamawami	202	611	Solicitud administrativa de constitución			40	Priorizado
12	Cabildo Awá Sevilla	186	392	No tiene solicitud			30	Priorizado
14	Cabildo Alto Temblón	55	151	Trámite administrativo de constitución			360	Priorizado
15	Cabildo Chanul	17	36	Solicitud administrativa de constitución			100	Priorizado
16	Cabildo Agua Blanca Piedra Verde	20	66	Solicitud administrativa de constitución			300	Priorizado
17	Cabildo Yarumo Piltkwazi	62	155	Solicitud administrativa de constitución de Resguardo			30	Priorizado
19	Cabildo Playa Rica	30	65	No tiene solicitud			30	Priorizado
21	Cabildo Kuhisminda	19	43	Solicitud administrativa de constitución de Resguardo			250	Priorizado
22	Cabildo Awá Damajawa	18	46	No tiene solicitud			150	Priorizado
	Cabildo Inwa Awá Marrein	25	60	Solicitud administrativa de constitución de Resguardo			36000	Priorizado
	Cabildo Pibi pai	40	104					Priorizado

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

23		Cabildo Watzal PA	12	33	KATSA SU				Priorizado
		Cabildo Valle Hermoso	19	56					Priorizado
		Cabildo Maikin Su	45	87					Priorizado
24		Cabildo Sindawa Alto Tesalia	22	66	No tiene solicitud			60	No tiene proceso
	Subtotal		1362	3655		8089	2070	37800	
26	V/ Guamuez	Cabildo Awa In	37	124	No tiene solicitud			30	Priorizado
27		Cabildo Alto Comboy	50	156	No tiene solicitud			400	Priorizado
28		Cabildo Awa Tatchan	93	361	No tiene solicitud			5	Priorizado
	Subtotal		180	641				435	
29	San Miguel	Cabildo Cristalina II	137	473	Trámite de titulación			47000	Priorizado
30		Cabildo Monterrey	78	304	Solicitud de constitución			43000	Priorizado
31		Cabildo Awa Unión la Dorada	148	745	Solicitud de constitución			8000	Priorizado
32		Cabildo Awá La Raya	30	135	Solicitud de constitución			150	No tiene proceso
	Subtotal		393	1657				98150	
33	Pto Asis	Cabildo Awá La Cabaña	42	111	Trámite administrativo de titulación			250	Priorizado
34		Cabildo Villa Del Sol	37	73	No tiene solicitud			80	Priorizado
35		Cabildo La Planada	15	41	Solicitud de constitución			60000	Priorizado
	Subtotal		94	225				60330	
36	Pto Caicedo	Cabildo Brisas del Palay	39	92	No tiene solicitud			15	Priorizado
37		Cabildo Campo Bello	25	86	Solicitud de constitución			30	Priorizado
38		Cabildo Villaunión	49	139	Resguardo constituido	1570			Priorizado
39		Cabildo Las Vegas	54	165					
40		Cabildo San Andrés	75	147					
41		Cabildo Damasco vides	64	161	Resguardo constituido y en trámite de ampliación	834	75		Priorizado
	Subtotal		306	790		2404	75	45	
42	V/Garzon	Resguardo Playa Larga	39	159	Resguardo constituido	669	280		Priorizado
43		Resguardo Mayasker Awá	26	111	Resguardo constituido	260			Priorizado


	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

44		Cabildo Siloe	15	33	No tiene solicitud			400	Priorizado
45		Cabildo Alto Chawi	8	19	No tiene solicitud			200	No tiene proceso
46		Cabildo Florida Alto Sardina	17	39	No tiene solicitud			400	Priorizado
47		Cabildo Katsa TI	36	90	Solicitud de constitución y compra de tierra			150	Priorizado
	Subtotal		141	451		929	280	1150	
48	Piamonte Cauca	Cabildo Awá Sindawa	30	113	Solicitud de titulación			1500	
49	Jardines de Sucumbíos Ipiales	Resguardo Ishu Awá	82	290	Resguardo constituido y tramite de ampliación	6017	3300		Priorizado
	TOTAL		2588	7822		17439	5725	199410	

A los limitados avances en términos de acceso a territorio colectivo, se suman los impactos que la política de erradicación de cultivos de coca ha tenido sobre las comunidades Awá. En la Alerta Temprana 013-21 se manifestaba “[...] *La acelerada implementación de la erradicación, paralela a una baja implementación de los proyectos derivados de la sustitución, sin el ofrecimiento de alternativas que permitan garantizar formas de subsistencia dignas para la población, puede incrementar el impacto de dichas conflictividades a la par de generar inseguridad jurídica para los cultivadores. En tal contexto, no se descarta que los actores armados ilegales busquen aprovechar el descontento social y la carencia de una gestión institucional orientada hacia la generación de condiciones dignas para la población cultivadora, para afianzar sus discursos e intereses y asimismo generar presiones sobre la población o retaliaciones sobre ella una vez efectuada la erradicación.*”

Dichas conflictividades sociales constituyen un factor de vulnerabilidad ante presiones y los intereses de los grupos fuente de amenaza. Por ejemplo, en el marco de las movilizaciones anti erradicación adelantadas en San Miguel durante las primeras semanas de agosto de 2022, presuntas presiones de los Comandos de la Frontera en contra del pueblo Awá se habrían materializado en coacción para salir a protestar en el Puente Internacional, así como bloquear la policía antinarcóticos en el desarrollo de operaciones de erradicación. Por otra parte, las comunidades Awá en el municipio de Orito, Inspección de Policía del Portugal, varios Resguardos y Cabildos se encontrarían confinadas con ocasión de un panfleto de la estructura armada que restringe la movilidad, conforme al monitoreo hecho por la Defensoría del Pueblo.

A finales del mes de junio de 2022, la Defensoría también reportó situaciones de confinamiento en el resguardo Ishu Awa, ubicado en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos, a cuenta de los Comandos de la Frontera. Según se corroboró, las familias de la etnia Awá no podrían ingresar a sus chagras y algunas viviendas estaban siendo

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018


utilizadas por este grupo.

Por otro lado, el día 26 de junio de 2022, este grupo habría asesinado a una persona frente a la casa del Cabildo, hecho que fue tomado por algunos miembros de la comunidad como una amenaza directa. Según se reportó en dicho momento, Comandos de la Frontera estaría instalando los campamentos dentro del Resguardo Ishu Awam, para la práctica polígono y entrenamiento.

De ahí el reiterado llamado de la Defensoría del Pueblo para la implementación de acciones institucionales integrales que permitan superar la problemática asociada a los cultivos de uso ilícito, bajo el reconocimiento de los Derechos Humanos y en armonía con la jurisdicción especial indígena, que permita la mitigación de la vulnerabilidad del pueblo Awá ante los intereses y acciones violentas de los actores armados ilegales y, reconstruya la confianza hacia las instituciones, particularmente con la fuerza pública, en tanto esta relación ha estado mediada por el ejercicio de erradicación forzada, que ha derivado en algunos casos en la confrontación entre las partes, incidiendo sobre la legitimidad institucional.

Valga decir que, a criterio de la comunidad, la baja respuesta institucional ante demandas que han sido tramitadas desde hace muchos años, ante instancias nacionales como internacionales, desalienta y resta credibilidad en las acciones del Estado como garante de sus derechos y les lleva a manifestar que “las instituciones no miran el sufrimiento de las comunidades”. Su proximidad con la institucionalidad, como se ha dicho, se ve afectada por las acciones de sanción ante la única economía que en este momento les ha posibilitado la subsistencia y no tanto por la implementación de las medidas establecidas en las diferentes herramientas de política pública y aquellas derivadas de la Constitución Política para la garantía de los derechos como pueblos indígenas.

Así, en un escenario en donde hay una presencia sostenida de actores armados no estatales en las zonas rurales de los municipios, sumada a la escasa presencia institucional, la presión ocasionada por las economías extractivas, el crecimiento de los cultivos de coca, el fortalecimiento del circuito económico basado en este producto y las políticas antidrogas, han impactado negativamente la garantía a los derechos colectivos del pueblo Awá en Putumayo y en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

NIVEL DEL RIESGO:

ALTO

☒

MEDIO

☐

BAJO

☐

AUTORIDADES E INSTITUCIONES CONCERNIDAS

AUTORIDADES CIVILES: Ministerio de Defensa; Ministerio del Interior, Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección; Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficina de Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República; Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; Agencia Nacional de Tierras; Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas; Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; Fiscalía General de la Nación; Gobernaciones de Nariño, Putumayo y Cauca; Alcaldías Municipales de Ipiales, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Villagarzón y Piamonte; Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Procuradurías Regionales de Nariño y Putumayo y las Personerías de Ipiales - Nariño, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón - Putumayo y Piamonte - Cauca

FUERZA PÚBLICA:


Fuerzas Militares: Ejército Nacional y Armada Nacional.
Policía Nacional.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el escenario de riesgo existente en los territorios identificados en la presente Alerta Temprana de Inminencia y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población - especialmente de las comunidades étnicas - habitante de estos territorios, se realizan las siguientes recomendaciones con el propósito de buscar la prevención de violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, así como impulsar acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos señaladas anteriormente.

Así mismo, y conforme lo expuesto al inicio, es menester reiterar la NATURALEZA PREVENTIVA Y HUMANITARIA DE LA PRESENTE ALERTA TEMPRANA, en mérito de lo cual se exhorta firmemente a las entidades destinatarias de las siguientes recomendaciones a:

i) Implementar sus deberes de reacción rápida e implementación de recomendaciones bajo una perspectiva de DD.HH y DIH y de seguridad humana, que eviten se susciten o potencien nuevos riesgos.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

ii) Abstenerse de justificar públicamente el ejercicio de acciones bélicas, incautaciones, capturas y otras análogas en la presente Alerta y sus recomendaciones, asuntos que no son materia de estos documentos de advertencia. Tal justificación puede distorsionar la interpretación de la naturaleza humanitaria de la gestión preventiva que le es propia a esta Entidad. Por tanto, se exhorta a informar y reportar toda acción institucional de forma directa a la Defensoría únicamente en los canales que se enlistan al final de la presente y en el marco de las sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y reuniones específicamente solicitadas por la Defensoría para tal fin.

a. Coordinación de la respuesta rápida

1. Al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, dar trámite inmediato de la presente Alerta Temprana ante las autoridades concernidas en cada una de sus recomendaciones. En particular, verificar y asegurar que se adopten medidas urgentes y preferentes en materia de prevención, disuasión, protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades, a favor de cada uno de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, ante el escenario de riesgo aquí advertido.


De la misma manera, se insta a esa Secretaría Técnica a promover la participación, en las sesiones de seguimiento que se convoquen a propósito del presente documento, a las autoridades indígenas y afrodescendientes de los territorios identificados en riesgo en el corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos - Nariño, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón - Putumayo, y Piamonte - Cauca. Para tal efecto, se insta a trabajar en una metodología clara, precisa y con enfoque étnico, de género y de acción sin daño que guíe las eventuales intervenciones en esta instancia, y garantice la seguridad de dichos representantes en el espacio señalado.

2. Al Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la CIPRAT, convocar in situ las sesiones de seguimiento, coordinación y valoración de la reacción rápida al riesgo advertido mediante la presente Alerta.

b. Disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y de protección de las comunidades:

3. Al Ministerio de Defensa Nacional, implementar operativos de registro y control permanente en las áreas focalizadas en la presente Alerta Temprana con el objetivo de proteger y garantizar la seguridad de la población civil ante posibles afectaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad por parte de los actores armados. Lo anterior, con estricta observancia de las normas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el planeamiento, ejecución y uso de la fuerza, en el marco de sus competencias constitucionales.

4. Al Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Derechos Humanos, Fuerzas Militares y Policía Nacional por intermedio de sus unidades tácticas con jurisdicción en

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, los municipios de Ipiales - Nariño, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón en el departamento de Putumayo, y Piamonte en Cauca, aplicar de manera rigurosa el contenido de la Directiva 016 de 2006 y Directiva 07 de 2007 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, así como la Directiva Permanente No. 01150 de 2016 del Ejército Nacional, como desarrollo del principio constitucional de autonomía de los pueblos indígenas, particularmente en lo atinente a:

Designar un Oficial Enlace con el fin de servir de contacto con las autoridades propias (tradicionales y representativas), quien se encargue directamente de atender a las comunidades, escuchar sus quejas, recibir información y fomentar la confianza mutua. Concertar previamente todo ingreso de la Fuerza Pública a los territorios colectivos étnicos, cumpliendo rigurosamente las condiciones de acceso que se pacten con las autoridades propias y manteniendo un amplio nivel de coordinación hasta la retirada de la Fuerza Pública del territorio protegido;


Que sus acciones tengan en cuenta lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, en términos de: “evaluar las distintas alternativas operativas y estrategias posibles, que opten por aquella que implique mejores resultados en términos de seguridad y de protección efectiva de los derechos desde sus habitantes, debiendo contener medidas concretas para reducir los riesgos que puedan surgir como reacción a la presencia de la Fuerza Pública” (Auto 174 de 2011, Corte Constitucional).

Finalmente, se insta al Ministerio de Defensa, a que, en **coordinación** con las autoridades étnicas, adopte las medidas necesarias tendientes a minimizar la situación de riesgo y garantizar los derechos fundamentales colectivos e integrales, y el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario a todas las comunidades indígenas referidas en la presente alerta temprana, respetando su autonomía, su territorio y su identidad cultural.

c. Investigación y acceso a la justicia.

5. A la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública con jurisdicción sobre los territorios focalizados, robustecer los procesos de inteligencia e investigación criminal, que posibiliten: i) la efectiva prevención de vulneraciones en contra de la población civil, ii) la captura, judicialización y sanción de los máximos responsables de los delitos contra la vida e integridad, libertad y medio ambiente referidos en esta Alerta Temprana, y iii) el desmantelamiento de las organizaciones que configuran el presente contexto de amenaza, como garantía de no repetición. En particular, es importante que las acciones de inteligencia se adopten y desarrollen con pleno respeto a los derechos humanos y al DIH, teniendo en cuenta el reconocimiento de la jurisdicción indígena a que haya lugar.

6. A la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, tener en cuenta el escenario de riesgo analizado en el presente documento de advertencia, que derive en la priorización de acciones orientadas al desmantelamiento efectivo de los grupos fuente de amenaza y aplicando el enfoque territorial en términos de: i) reconocer la diversidad del territorio nacional en su geografía; ii) particularidades de la criminalidad, y iii) condiciones culturales y sociales de los grupos étnicos identificados en riesgo.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

7. Al Ministerio del Interior como Secretaría Técnica de la CIPRAT, articular con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación, con el propósito de definir estrategias de superación de las causas estructurales generadores de los factores de riesgo, y que pueda derivar en el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres y otros delitos, conforme lo dispuesto en el Artículo 10, Numeral 9 del Decreto 2124 de 2017. Para el efecto, se exhorta a construir e implementar un plan de acción, con objetivos y actividades claras y con mecanismos de seguimiento concretos.

d. Adopción de medidas de prevención temprana y urgente, en protección y garantías de no repetición.

8. A las Alcaldías de Ipiales - Nariño, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón en el departamento de Putumayo y Piamonte en Cauca, con el apoyo de las Gobernaciones del Putumayo, Nariño y Cauca, y con la asistencia técnica de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, establecer un mecanismo de seguimiento que permita evaluar la efectividad de las acciones formuladas en el Plan Integral de Prevención y Protección de dichos municipios.


De la misma manera, se solicita a la UARIV y a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, guiar metodológicamente a los municipios alertados sobre la forma de articulación de las acciones del plan de contingencia con el Plan Integral de Prevención, y con los programas de protección dispuestos en el Decreto 1066 de 2015 y demás normas dirigidas a salvaguardar la vida y protección de los grupos poblacionales focalizados en la presente Alerta.

Finalmente, se insta a la Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas - UARIV, priorizar los procesos de retornos, reubicaciones y reparación colectiva de la población Awá asentada en el departamento del Putumayo.

9. A la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y Fiscalía General de la Nación evaluar de manera conjunta con el pueblo Awá y los pueblos indígenas asentados en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos - Nariño, los daños ocasionados en el ejercicio de la erradicación y se adopten las medidas para armonizar los procedimientos con fundamento en la autonomía étnica.

10. A la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, instar a que se garantice el derecho a la consulta previa para el desarrollo de planes, programas o proyectos que se desarrollan en los territorios de asentamiento del pueblo Awá, pueblos indígenas y comunidades negras de consejos comunitarios ubicados en el Corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbíos - Nariño, como para los ejercicios de erradicación de cultivos de uso ilícito³⁰.

³⁰ De conformidad con la Sentencia SU- 383 de 2003, se les recuerda respetuosamente a las entidades concernidas que el Estado colombiano tiene la obligación y los pueblos indígenas el derecho de surtir un proceso de consulta previa antes de dar curso a la erradicación.

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

11. A las **Gobernaciones de Putumayo y Nariño** y las **Alcaldías Municipales de Ipiales, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón** con el apoyo de la **Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio Público**, activar las rutas de protección individual y/o colectiva, conforme el artículo 2.4.1.6.3 del Decreto 2252 de 2017, en favor de autoridades étnicas, líderes y lideresas y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo y que fueron expuestos en el presente documento de advertencia.

12. A la **Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior**, en coordinación con la **Unidad Nacional de Protección - UNP**, en el marco de los Decretos 1066 de 2015 y 2078 de 2017, socializar la ruta de protección colectiva y las medidas de emergencia para la protección de las comunidades étnicas referidas en esta Alerta Temprana.


13. En virtud de lo anterior, y una vez socializada dicha ruta, si algunas de las comunidades arriba referenciadas deciden iniciar la implementación de la ruta de protección colectiva, la **Unidad Nacional de Protección en coordinación con la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior**, se exhorta a asistir técnicamente a la autoridades propias y/o líderes comunitarios, para elaborar la solicitudes correspondientes, en aras de fortalecer su protección colectiva con el debido enfoque diferencial.

De la misma manera se insta a la **Unidad Nacional de Protección - UNP**, para que se priorice el análisis de las solicitudes de protección individual y colectiva realizadas por los pueblos indígenas y los Consejos Comunitarios referidos en esta alerta y a que tome en consideración en sus análisis los riesgos acá analizados.

14. A la **Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, Gobernación del Putumayo, Gobernación de Nariño** y administraciones municipales en donde tenga asentamiento el pueblo Awá, avanzar en el proceso de implementación del Plan de Salvaguarda de este pueblo, especialmente, los siguientes componentes: i) Niñez y Juventud; ii) Derechos Humanos: Prevención y Protección; iii) Territorio.

15. Al **Ministerio de Relaciones Exteriores** en coordinación con la **Oficina de Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República**, fortalecer la comunicación y articulación entre entidades colombianas y ecuatorianas para facilitar el monitoreo de la población étnica asentada en la franja binacional, que permita identificar los impactos humanitarios derivados del conflicto armado.

16. A la **Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales**, como **Secretaría Técnica de CIPRUNNA, Gobernaciones de Putumayo y Nariño**, el **Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF** y las **Alcaldías Municipales de Ipiales, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón y Piamonte - Cauca**, para

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

que adelante la formulación de una hoja de ruta que derive en la articulación de acciones de prevención del reclutamiento forzado, uso y utilización de NNA, en términos de nación - territorio con participación de autoridades étnicas, identificando la oferta institucional y la asignación de recursos para su materialización, con especial énfasis en la zona rural.

e. Fortalecimiento comunitario y organizativo en clave de capacidades sociales para la autoprotección:

17. A la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior, garantizar el fortalecimiento organizativo y gobierno propio de las comunidades étnicas advertidas en el presente documento de advertencia, en términos de: i) legislación étnica vigente; ii) procesos de consulta previa; iii) aspectos básicos de los derechos humanos y principios del derecho internacional humanitario; estructura de Estado y mecanismos de exigibilidad; iv) derechos de los niños y niñas; v) derechos de las mujeres pertenecientes a colectividades étnicas; vi) Fortalecimiento de los mecanismo o medidas de autoprotección comunitaria dirigidas a las autoridades étnicas. Lo anterior, de manera concertada y con plena participación de las autoridades étnicas.

f. Medidas de política pública para la superación de factores de vulnerabilidad y desprotección social.


18. A la Agencia Nacional de Tierras en coordinación con las Gobernaciones de Nariño y Putumayo y las Alcaldías de Ipiales, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Villagarzón, revisar y priorizar las acciones pertinentes para la atención y respuesta de las solicitudes de conformación, ampliación y saneamiento de resguardos.

19. A las Gobernaciones de Nariño y Putumayo organizar, liderar, financiar y desarrollar una jornada descentralizada de atención para los pueblos indígenas y Consejos Comunitarios referidos en el presente documento de advertencia, en la que se vincule la participación de entidades tales como la UARIV, ICBF, secretarías adscritas a las gobernaciones, SENA, Prosperidad Social - DPS, entre otras, con el ánimo de propiciar mecanismos y espacios de acercamiento comunitario y diagnóstico de necesidades que derive en la proyección y ejecución de un plan de trabajo dirigido a fortalecer la oferta institucional para las comunidades.

g. Acompañamiento del Ministerio Público a la gestión preventiva.

20. A la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, las Procuradurías Regionales de Nariño y Putumayo y las Personerías de Ipiales - Nariño, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Villagarzón - Putumayo y Piamonte - Cauca, realizar el seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades concernidas en la presente Alerta Temprana, adoptando cuando sea del caso, las acciones preventivas y disciplinarias que procedan.

Finalmente, se reiteran todas las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 013-21, destacando que la presente advertencia no subsume los escenarios de riesgo

	Nombre del proceso/Subproceso: Prevención y Protección	Código: PP-P01-F10
	ALERTA TEMPRANA	Versión: 01
		Vigente desde: 07/09/2018

identificados en dicho documento, al tiempo que se adelantará el seguimiento de estos dos instrumentos de manera independiente.

A la secretaría técnica de la **CIPRAT**, informar a la Dirección del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las actuaciones y medidas adoptadas con respecto a las recomendaciones formuladas en la presente advertencia conforme a lo determinado por la Honorable Corte Constitucional en Auto No. 178 de 2005, Auto No. 218 de 2006 y particularmente en Auto Seguimiento No. 008 de 2009 a la Sentencia T-025 de 2004 y la Ley 24 de 1992, a los siguientes datos de contacto:

- a. Correo electrónico institucional: delegadasat@defensoria.gov.co.
- b. Dirección: Calle 55 No 10-32, Bogotá D.C.

Esto sin perjuicio de los canales que el Ministerio del Interior también haya establecido autónomamente para ese fin.

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS CAMARGO ASSIS
Defensor del Pueblo

Revisó y Aprobó: Ricardo Arias Macías. Defensor Delegado para la Prevención de Riesgos de DDHH y DIH
Archivado en: Alertas Tempranas 2022

